

Sobre maíz y seguridad alimentaria. Una charla con Luis Gómez Oliver

Karina Navarrete Pérez y Adolfo Cruz Cecilio¹

Entre 2007 y 2014 se produjo un incremento de los precios internacionales de alimentos que resultó desastroso para el derecho a la alimentación de los mexicanos. La gran dependencia de las importaciones agrícolas y el hecho de que más de un tercio de la alimentación nacional se cubra con éstas ha generado un aumento significativo en los precios internos. Este encarecimiento de los alimentos ha agravado drásticamente la inseguridad alimentaria que sufre la población más pobre del país. Y sin los ingresos necesarios para compensar esa carestía, ello significa un menor consumo de comida en cantidad y calidad. En este sentido, charlamos con Luis Gómez Oliver, profesor de la Facultad de Economía de la UNAM y especialista en desarrollo agroalimentario, acerca de las preocupaciones crecientes sobre la inseguridad alimentaria y las acciones necesarias para enfrentar la crisis.

¹ Navarrete Pérez es académica de la Facultad de Economía de la UNAM y Cruz Cecilio es licenciado en Letras Hispánicas por la UNAM. Esta entrevista fue realizada para su presentación en el diplomado "Edición, diseño editorial y producción editorial. La edición reciente en México", División de Educación Continua de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, Ciudad de México, julio de 2018.

© 2019 Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía. Este es un artículo *Open Access* bajo la licencia [Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/).

– Para entender la inseguridad alimentaria que aqueja a millones de personas en el país y el mundo, ¿qué factores determinan que el consumo de alimentos no sea el óptimo?

– Lo que ocasiona la inseguridad alimentaria, esto es, la falta de seguridad alimentaria, varía según las regiones, países y condiciones. Hay, sin embargo, dos casos principales: en algunos países es por la ausencia física, es decir, faltan alimentos y no están disponibles en la región. Esto ocurre en África o Haití, por ejemplo, y aumenta su frecuencia cuando hay conflictos violentos, pues las condiciones de guerra pueden aislar poblaciones sin que tengan acceso a alimentos. No obstante, la causa más general, y la que se vive en México, es la insuficiencia de acceso económico a los alimentos. Éstos, pese a estar presentes, no pueden comprarse ni producirse directamente.

– Si el maíz es el principal elemento en la alimentación de los mexicanos, ¿cómo afecta la crisis de distribución de granos a su producción?, ¿cómo la ataca la política agropecuaria?

– Tiene mucho que ver. De hecho, está casi determinado por las políticas. Efectivamente, el alimento básico de nuestra dieta es el maíz, el cual se produce en todo el territorio. Hay, asimismo, condiciones en las que se puede producir gracias a recursos naturales muy favorables y otras en las que, pese a ser difícil, de todos modos se intenta cultivar.

El maíz tiene dos formas de llegar a las familias: lo compran en el mercado o lo producen. El segundo caso es autoconsumo. Éste, pese a ser importante, ya no es tan frecuente; esto hace que predomine la compra de maíz, sea en forma de tortilla, masa, harina... Ahora, también hay una distribución de grandes mercados regionales que van más allá de donde se produce y llegan a ser nacionales. Entonces, hay mercado local o autoconsumo y mercado regional que es nacional.

Por largo tiempo se favoreció la producción de maíz porque se pagaba un alto precio de garantía, aunque tenía inconvenientes debido a sus altos costos fiscales. Esto es, el gobierno compraba caro y luego tenía que vender y la diferencia era pagada con los ingresos de todos los mexicanos, con los impuestos. Otro inconveniente es que su beneficio era muy regresivo, es decir, entre más grande la venta, más beneficios tenía y, como consecuencia, los que vendían poco eran menos favorecidos. Por ello, era una política desfavorable, pero hacía que se produjera maíz.

Tras la firma del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se eliminó el precio de garantía y se creó el Programa de Apoyos Directos al Campo (PROCAMPO). Ahora se daba el dinero a los productores. De esta manera, ya no era un subsidio vía precios, sino un subsidio para las personas: una política de ingreso.

– Ya que menciona el programa PROCAMPO, ¿qué relación habría entre éste y PROSPERA Programa de Inclusión Social?

– Son dos programas de política de ingreso. Pese a que al primero de estos se le atribuyen objetivos productivos, en realidad es una política de ingreso, pues se da dinero a los agricultores dueños o usufructuarios de la tierra. Por otro lado, PROSPERA es un complemento de dinero a la gente pobre. En el caso de PROCAMPO, ahora Programa de Fomento a la Agricultura (PROAGRO), se da a las superficies de labor que antes tenían precio de garantía, para que puedan producir mejor; más si se quieren comprar una televisión, lo hacen. No pasa nada, pues no tienen que justificar el gasto. En cambio, PROSPERA es para que la gente pobre pueda tener un complemento de ingreso, mediante transferencias directas y condicionadas a que la mamá inscriba a los niños a la escuela, que los lleve a la clínica, entre otros. El dinero es otorgado a las madres porque son ellas las que manejan el gasto familiar. Entonces, quien tenga déficit de alimentos o de ingreso recibe una transferencia de ingreso directa.

– ¿Usted considera que el programa PROSPERA ha ayudado?

– Ayuda muchísimo. Si se ordena toda la población de los más pobres a los más ricos, el 10% más pobre tiene como principal ingreso tal programa. O sea, que si se le quita éste, se le retiraría su principal fuente de ingreso. Asimismo, para el siguiente 10% de esta división, tal ingreso sigue siendo elemental. En buena medida de eso viven, así como de remesas. Todavía para el tercer 10%, este programa es muy importante. Esto, sin embargo, no quiere decir que se esté resolviendo la pobreza ni la inseguridad alimentaria, mas sí las alivia, en tanto es su principal fuente de ingreso. La gente recibe la transferencia directa, con eso come, pero no resuelve el ser pobre. Van a tener que volverle a dar el apoyo porque no va a tener qué comer.

– Existen productores que se resisten a la penetración de granos transgénicos y pugnan por mantener sus cultivos, sus tierras y su forma de vida. ¿Esto constituye una alternativa para recuperar la seguridad alimentaria en México, o la perjudica?

– Los transgénicos tienen ventajas y desventajas y un elemento incierto. Algunas de las ventajas son que pueden presentar cualidades particulares; por ejemplo, pueden tener un mayor desarrollo, mayor rendimiento, resistencia a plagas, a enfermedades y resistencia a la sequía, lo cual sería muy interesante. Todas esas cualidades que pudieran ofrecer las semillas desarrolladas transgénicamente hacen que haya una mayor producción.

Mientras que algunas desventajas son que se producen por una empresa, la cual tiene la patente. Este hecho hace que no cualquiera puede comprar la semilla. Asimismo, ya no es frecuente que el agricultor busque la mejor semilla de su cosecha y la vuelva a sembrar, acto, por cierto, que también se ha llevado a cabo en los institutos de investigación agrícola. Ahí se generaban variedades de semillas que tenían cualidades más productivas, más resistentes y también eran sembradas por los productores y los agricultores, mas no lo podían hacer por segunda vez, así que era necesario volver a comprarla. Éstas eran, en general, semillas auspiciadas por el gobierno y en el ámbito nacional. Ahora, sin embargo, son transnacionales. Hay que tener la patente y el monopolio; es un requisito de regulación y también un inconveniente.

Otra dificultad es que hay incertidumbre. No se sabe si son, a la larga, tóxicas o no; se sabe que a corto plazo no lo son. No hay evidencia de que sea nociva, pero tampoco de que no lo sea. Ese es el problema. Asimismo, los transgénicos remplazarían múltiples razas y variedades de maíz. Entonces, en vez de tener una gran diversidad, tendríamos pocas semillas. Esto, sin embargo, no es nuevo. Eso es lo que ha hecho la agricultura desde sus comienzos. Los agricultores, al seleccionar, van eliminando todas las malas hierbas, que a final de cuentas no sabemos si son buenas o malas, pero las eliminamos. Se van suprimiendo ciertas razas y van dejando las más productivas. De muchísimas variedades ya quedan pocas. Sólo se acentuaría un proceso que vino desde antes de los transgénicos.

– ¿Qué acciones públicas o privadas podrían llevarse a cabo para lograr una seguridad alimentaria?

– Creo que es muy importante reconocer lo que pasa en México. En el campo mexicano hay cinco millones de unidades productivas. De esas, hay medio millón que son empresas que producen maíz, hortalizas, carne o leche, entre otros. Luego un millón que son unidades familiares que viven de la agricultura. Es decir, la unidad productiva y la unidad de consumo familiar son la misma. Compran semillas, venden maíz, compran insumos, venden productos. Son familias agricultoras y dependen de eso. Quedan ahora tres millones y medio de unidades que son campesinos de subsistencia, esto es, que producen, pero no son agricultores; no viven de ello. Son los que trabajan en un taller, jardineros o, típicamente, asalariados. Y si no, son comerciantes, obreros o empleados domésticos, entre otros. A pesar de vivir de ese sueldo, tienen una pequeña producción. Todos tienen gallinas, conejos, hortalizas, frijol o alguna hilera de maíz. La cuarta parte de estos no tiene ni siquiera una parcela, o sea, no son agricultores. Tampoco tienen ganado. Producen solamente en su patio, pero no son agricultores y no podrían vivir de eso.

Entonces, tenemos que identificar tres áreas diferentes. A las empresas hay que darles estímulos que sirvan para su progreso, por ejemplo, apoyarlos a que tengan nuevos mercados, nuevos productos, nuevas formas tecnológicas. A la agricultura familiar, por otro lado, le falta acceso al mercado. No produce más porque no tiene a quién venderle ni cómo transportarlo ni cómo almacenarlo. Consecuentemente, si se resuelve el asunto con mercados locales, y con la ampliación de estos, esas familias podrían producir más, pues tienen la potencia para hacerlo. Y para los restantes tres millones y medio, pese a no ser agricultores ni funcionar como fuentes agrícolas, sí es posible mejorar su autoconsumo, mas su ingreso no sale de ahí, por tal, la pobreza no se resuelve de este modo, pues sus principales fuentes de ingreso son el trabajo asalariado y el comercio; destacando el primero de estos. Pese a que hay muchos campesinos de subsistencia que no van a vivir de la agricultura, ésta puede ser un complemento muy importante para su consumo.

Lo que se necesita es un sistema laboral adecuado. La mayor parte de los jornaleros que trabajan en Baja California, Sonora o Sinaloa son campesinos de Guerrero, Chiapas, Oaxaca.... Van allá a laborar muy duramente por un salario muy bajo, porque eso es mejor que lo que podrían tener en sus estados de origen a causa de la falta de opciones. Así, hay que trabajar en los dos lados: dar más opciones en las localidades del sur y sureste de donde salen los jornaleros, y mejorar las condiciones de trabajo, que no se hace con leyes, sino con incentivos reales, con organización, con políticas, con consensos, con los propios empresarios.

Tenemos, por tanto, tres rubros distintos. Si juntamos los tres de una forma en la que estemos de acuerdo tanto el gobierno, como las instituciones académicas, organizaciones civiles, campesinos, agricultores y empresas, estaremos bien. 